

## ECONOMÍA / POLÍTICA

## Los retos de un curso sombrío en

**CRISIS/** La economía enfila hacia el otoño bajo la amenaza de un apagón invernal en Europa y el miedo a la recesión. Las

J. Díaz, Madrid

Tras un verano abrasador, en que España se ha visto consumida por decenas de incendios que han calcinado el país de norte a sur y de este a oeste, dejando miles de hectáreas yermas y sepultando al campo español bajo una montaña de pérdidas por la sequía, el nuevo curso político y económico comienza, un año más, bajo el aciago signo de la crisis.

Después de dos años de pandemia, que sumieron a España en un profundo bache económico del que aún pugna por salir, la guerra en Ucrania ha frenado en seco el proceso de recuperación, amenazando con sumergir a Europa en una nueva recesión. Con este sombrío telón de fondo, España se adentra en uno de sus periplos políticos y económicos más inciertos. Lo hace tras el Consejo de Ministros del martes pasado y el pleno del Congreso del jueves, en el que se dio luz verde a normas pendientes como la nueva Ley Concursal, el controvertido decreto ley sobre el plan de ahorro energético del Gobierno o el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Asignaturas que quedaron sin aprobar al final del curso pasado y cuyo debate y votación sirvieron a la clase política para escenificar el retorno anticipado de las vacaciones ante un otoño que se anticipa turbulento, tórrido en lo político pero gélido en lo económico. De hecho, el fantasma de un apagón energético sobrevolará Europa durante el otoño y el invierno y la imposición de los planes de ahorro energético también impregnarán la agenda española, en un contexto en el que la ciudadanía y los negocios arrastran, cansados, años de confinamientos, restricciones y trabas.

Con estos mimbres da España el pistoletazo de salida al nuevo curso, una etapa que, con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina (el 28 de mayo del año que viene) y los comicios generales a un año y medio vista, tendrá un marcado tinte electoral. Después de

**Yolanda Díaz  
abordará el próximo  
2 de septiembre  
una nueva  
subida del SMI**

**Sánchez se echa a la calle: 30 actos hasta final de año para intentar remontar en las encuestas**

dos años y medio de crisis encadenadas, primero por el Covid y ahora por la invasión de Ucrania, Pedro Sánchez ha traspasado el ecuador de la legislatura con un profundo desgaste político, hasta el punto de que a mediados de agosto se vio impelido a salir a la palestra para negar que en sus planes figurase acometer una crisis de Gobierno. “Este es un Gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura”, aseguró el jefe del Ejecutivo en un intento de zanjar lo que calificó de “especulaciones”.

Lo cierto es que pandemia y guerra han erosionado la imagen y las costuras de un Gobierno cogido con pinzas desde su mismo nacimiento, con dos socios, PSOE y Podemos, que discrepan en asuntos cruciales de Estado y cuyas diferencias han ido *in crescendo* en los últimos meses, hasta el punto de votar en sentido contrario en algunas iniciativas. A ello se añade la irrupción de Sumar, la nueva plataforma política de Yolanda Díaz con la que ésta podría concurrir a las elecciones generales y que ha supuesto la consumación de su divorcio de Podemos. A la fractura de la izquierda populista se suma la propia fragmentación parlamentaria, que convierte cada votación en el Congreso en un mercadillo persa, de precios y exigencias cada vez más altos al Gobierno por parte de sus aliados nacionalistas y secesionistas. Y la presión de un PP recompuesto, liderado por Alberto Núñez Feijóo, y que ahora ve posible y probable desalojar a Sánchez de la Moncloa, sobre todo tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, que provocó un cisma en el PSOE, con la salida de Adriana Lastra como vicesecretaria general del partido y la reestructuración de su cúpula. Para frenar ese deterioro e intentar impulsar la remontada en las encuestas, el PSOE ha confeccionado un intenso programa de actos, cuya ejecutiva aprobará hoy, que llevará a Sánchez y a sus ministros a parti-

cipar en un maratón de eventos en apenas cuatro meses: treinta entre septiembre y diciembre. Todo un *tour de force* bajo el lema *El Gobierno de la gente*, destinado a reivindicar su gestión y explicar sus planes de futuro cuyo pistoletazo de salida será el próximo sábado, 3 de septiembre, con un acto en Sevilla.

### Nueva alza del SMI

En este escenario de agitación política interna y gélidos vientos soplando desde el exterior, una de las primeras medidas del Gobierno tras el paréntesis estival será abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que tendría ya efectos en 2023. Para ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el jueves pasado no tuvo reparos en respaldar, e incluso alentar, las movilizaciones sindicales para reclamar subidas salariales, ha convocado a la comisión de expertos para el próximo viernes, 2 de septiembre.

Inicialmente, la intención es llevar el SMI al entorno de los 1.050 euros mensuales, propósito avalado por el propio jefe del Ejecutivo, que semanas atrás ya anticipó que ese nuevo incremento se abordaría en otoño, en un gesto de respaldo hacia su socia populista, pero también, y sobre todo, de reivindicación de la medida ante el propio electorado socialista. Sin embargo, Díaz ha sugerido en los últimos días que el alza podría ser mayor, al apostar por situar el SMI por encima de “la senda del 60%” del salario medio (los sindicatos piden subirlo a 1.100 euros).

### El pacto de rentas que no llega

El nuevo aumento del SMI, que previsiblemente volverá a salir adelante con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la patronal (su incremento es potestad legal del Gobierno), se produce en un contexto de fuertes presiones inflacionistas, con un IPC que en julio se disparó hasta el 10,8% frente a unos salarios que, pese a ir mejorando desde comienzos de año, lo han hecho a un ritmo cuatro veces inferior a la inflación (un 2,56% de media). Esta fuerte pérdida de



Tras los estragos del Covid, Pedro Sánchez arranca el nuevo curso económico y político bajo el signo de una

poder adquisitivo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, que (ahora animados por la vicepresidenta Díaz) amenazan con un otoño caldeado y conflictivo para forzar a los empresarios a mayores incrementos salariales. Un tira y afloja que no cesa desde que patronal y organizaciones sindicales dieran por rotas en mayo las negociaciones salariales para este año. Y todo ello en un contexto en el que el Banco de España insiste por activa y por pasiva desde hace meses en la necesidad de un pacto de rentas que reparta los sacrificios de la crisis y evite que el virus inflacionista contagie a los salarios y derive en un problema estructural. En marzo pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso encima de la mesa la necesidad de un pacto

de rentas para “evitar una espiral inflacionista”. Desde entonces, el acuerdo ha brillado por su ausencia, aunque el Ejecutivo asegura que no tira la toalla y que a partir de este mes de septiembre intentará impulsarlo de nuevo. Un pacto que para ser eficaz, según el Banco de España, debería incluir también a funcionarios y pensionistas. Quizás no sea misión imposible, pero sí parece harto difícil ante la determinación del Ejecutivo a revalorizar las pensiones con el IPC. En España hay 9 millones de pensionistas, un enorme caladero de votos que el Ejecutivo de Sánchez no parece dispuesto a contrariar. Que una vicepresidenta segunda del Gobierno aliente las protestas de los sindicatos frente a la patronal tampoco ayuda al necesario acuerdo

para repartir los sacrificios de la crisis.

### Segunda reforma de las pensiones

Precisamente, la segunda parte de la reforma de las pensiones es otra de las patatas calientes del nuevo curso. Tras sacar adelante en el Congreso a finales del año pasado las primeras modificaciones, que vincularon la revalorización de las prestaciones con el IPC, sepultaron el factor de sostenibilidad y fijaron acicates para demorar la jubilación y penalizaciones para los retiros anticipados, el Gobierno tiene que abordar ahora la parte del león de la reforma, aquella destinada a inyectar ingresos en el sistema, cuya viabilidad a medio y largo plazo sigue es-